

## PENA O GRACIA EN FLANDES BAJO CARLOS V Y FELIPE II, 1521-1598

*Hugo de Schepper\**

*Catedrático de Historia Moderna*

*(Universidad Católica de Nimega)*

*Ex-catedrático de Historia de Derecho*

*(Universidad de Amsterdam)*

**E**n su estudio sobre la ‘Gracia, Merced y Patronazgo real en Castilla entre 1474 y 1530’, el profesor Salustiano de Dios de la Universidad de Salamanca ha demostrado convincentemente que la práctica del derecho de la gracia en los terrenos de la política y de la justicia fue uno de los pilares más eficaces de la soberanía en el reino de Castilla <sup>(1)</sup>. Así mismo en Francia la otorgación de gracia fue un medio jurídico del poder monárquico intensivamente usado <sup>(2)</sup>. En Flandes, el actual Benelux y el norte de Francia, los duques de Borgoña y sus sucesores de la casa de los Austrias siguen el ejemplo francés, interviniendo en virtud del derecho de la gracia en pleitos civiles y penales, tanto ante sus propias cortes centrales y provinciales de justicia como ante los tribunales consuetudinarios locales y regionales. Al mismo tiempo permiten dispensaciones en la aplicación del derecho imperativo general y de las costumbres jurídicas. Todas las intervenciones extra-judiciales y extra-legales han sido otorgadas ‘de gracia especial’ (‘vuyt sunderlinghe gracie’, ‘de grásce speciale’) del soberano <sup>(3)</sup>. En esta conferencia, me limitaré a los medios de gracia soberana en el marco del derecho penal. Haré una comparación entre los reinados de Carlos V y Felipe II en Flandes.

### I. PRERROGATIVA Y MEDIOS DE GRACIA

Las comunidades post-carolingias no veían a los delitos como acciones que afectaban a una sociedad entera, sino como un perjuicio causado a una persona y su familia. Mejor que imponer una pena por perturbación del orden público, los jueces medievales preferían la imposición de la paz a espera de un acuerdo definitivo entre la familia perjudicada y la parte del delincuente. En caso de reconciliación se acababa la venganza con una indemnización a la víctima o a su familia de la parte perjudicada <sup>(4)</sup>.

En la baja edad media después de la indemnización y la reconciliación siguió un acuerdo amistoso entre el fiscal autorizado como representante de la autoridad pública y el acusado o condenado (la *composición*). El prevoste, el prevoste mayor u otros fiscales regionales o locales tenían la competencia de hacer un arreglo extra-judicial en

causas que normalmente hubieran sido penadas con un castigo corporal. Sobre todo estuvieron dispuestos a un arreglo financiero, si no hubiera suficiente evidencia y si las circunstancias humanitarias lo exigieran o en casos de daño a la buena reputación y dependiente del estado personal o financiero del acusado y de sus mediadores <sup>(5)</sup>. Si el fiscal no quería usar del medio de la composición con un presunto delincuente, exigiría contra él, castigo delante de un tribunal consuetudinario competente, cuyos jueces eran laicos —es decir no profesionales— que no tomaban en cuenta circunstancias atenuantes. Y visto el principio de ‘*confessus non appellat*’, no había posibilidad de apelación contra el veredicto penal. Las costumbres de que se sirven los tribunales consuetudinarios en sus sentencias, estaban fundadas en el principio de venganza ‘ojo por ojo, diente por diente’ <sup>(6)</sup>.

En cambio en las cortes principescas de nivel central o provincial del siglo XVI, los jueces son casi siempre profesionales que fundan su conocimiento del derecho en un estudio erudito universitario. Deficiencia en el desarrollo mental o un enfermizo trastorno de la facultad mental, son reconocidos por esos tribunales superiores como argumentos de irresponsabilidad del acusado para sus acciones <sup>(7)</sup>. También fuerza mayor por ejemplo puede ser causa para una sutil interpretación del derecho penal por la justicia central y provincial <sup>(8)</sup>. Sin embargo, con excepción de los *casus reservati*, la jurisdicción penal está normalmente en manos de los jueces laicos locales.

La administración de la justicia es el recurso más antiguo que los dinastas borgoñones y habsburgos tienen a su disposición para establecer la equidad, el orden y la paz en la sociedad. Sin embargo el asiento judicial del príncipe es el mismo que el del legislador. El uso de la gracia para intervenir en el derecho y en la justicia es por lo tanto un pequeño paso más, sobre todo cuando son los justiciables quienes piden con argumentos considerados legítimos que dicha gracia sea empleada, y cuando el soberano piensa que su uso sirve a su propio poder monárquico y al interés del estado. La diferencia entre los medios de justicia a que cada persona tiene el derecho de apelar por un lado, y los medios de gracia que dependen completamente de la benevolencia y misericordia del soberano por otro, poco a poco se hacía más evidente <sup>(9)</sup>.

Para las aspiraciones de los príncipes de Borgoña y de Austria, el derecho de gracia es una manera conveniente de desarrollar el poder regio de la misma manera en que quieren manifestar su poder como juez supremo y como legislador supremo en el proceso de formación del estado moderno. Como tal pueden empero intervenir los príncipes en casos individuales en el transcurso de los procesos criminales comunes ante los bajos tribunales consuetudinarios, para suspender después de todo la ejecución de las penas, o aliviar la pena y tratar a un justiciable con justicia, reconociendo los méritos individuales y las circunstancias de la violencia. El príncipe es muy consciente de que el medio de gracia une a los justiciables en un diálogo permanente a su persona. En materias criminales, el sospechoso o el acusado de delito sobre quien pende la amenaza de ser prendido y condenado, o el ya condenado encontrándose en una posición débil, reconoce de su parte al príncipe la supremacía competente de otorgar excepciones, principalmente donde las autoridades regionales o locales fallan o no quieren consentirlas <sup>(10)</sup>.

En la opinión de los jurisconsultos y de los teólogos, la gracia como medio de

corrección (entre otros) de la justicia penal es en esencia una prerrogativa soberana que no corresponde al *iudex inferior* sino al *princeps* como uno de los *regalia seu iura maiestatis*; ninguna otra persona tiene ese derecho <sup>(11)</sup>. Como monarca cristiano el príncipe así mismo procura combinar misericordia y clemencia con justicia, preferiendo la gracia al rigor de la justicia <sup>(12)</sup>. Cuando Felipe II como príncipe de Flandes quiere más severidad en la aplicación de la justicia penal, el cardenal de Granvela le advierte que no prohíba las peticiones de gracia introducidas por los justiciables, porque, sirviéndose de su derecho de gracia, 'Vostre Majesté userait de justice et de clemence' <sup>(13)</sup>. Pocos días después de la detención del conde de Egmond, el 9 de septiembre 1567, su mujer Sabina de Baviera envía una petición directa a Felipe II para ordenar la puesta en libertad a su marido, motivando 'que les grans Roix n'ont riens plus agreable à Dieu que la mansuetude, clemence et doulceur' <sup>(14)</sup>.

Desde el siglo XV la gracia del monarca en Flandes estaba creciendo hasta una prerrogativa perfectamente válida, y a la vez un medio de poder usado intensivamente. El Consejo Secreto, uno de los consejos de gobierno al lado del gobernador general en Flandes, consigue monopolizarla prácticamente para el príncipe <sup>(15)</sup>. Los medios de gracia principescos compiten en casos penales desde luego con los arreglos medievales de los fiscales subalternos, los cuales por consecuencia probablemente ya habían disminuido cuantitativamente en la segunda mitad del siglo XV <sup>(16)</sup>. Es cierto que los fiscales regionales y locales aún pueden pactar composiciones, pero solamente en nombre del dinasta y sobre todo después de un previo consentimiento por parte del consejo central o provincia autorizado, y sólo en caso de violaciones y delitos considerados de menor importancia; a lo sumo en materia de 'homicidio simple', eso quiere decir cuando sea un caso clarísimo de legítima defensa o de acción involuntaria <sup>(17)</sup>. Es justamente dicha corte principesca provincial la que decide en último término si un delito como homicidio o asesinato, debe ser juzgado como 'involuntario' o como un delito de menor importancia. En los otros casos de homicidio o de asesinato, las composiciones estaban absolutamente prohibidas <sup>(18)</sup>. Los medios de gracia principescos son sin embargo más atractivos que las composiciones tradicionales, debido al hecho de que pueden expresar matizaciones jurídicas más finas por ser tramitación de juristas profesionales <sup>(19)</sup>.

El celebre jurisconsulto neerlandés Felipe Wielant (1441?-Gante, 1520) cita el homicidio como una de las categorías más comunes en las que por medio de un indulto ('quytsceldinge ende remissie', 'quittance et remission') no sigue condena: homicidio en caso de defensa propia después de haberse visto envuelto involuntariamente en una contienda o por tratar de separar personas riñendo; un accidente mortal después de peleas que se desmandaron <sup>(20)</sup>. Cuando se trate de circunstancias en que cualquier hombre normal se apasione, podría ser base para excluir la culpa. Menores de edad y otros delincuentes con responsabilidad reducida que cometieron un delito, reciben casi sistemáticamente la gracia, incluso en caso de asesinato. Por medio de la carta de indulto, el presunto autor de delito adquiere restitución completa de sus derechos, antes del dictamen de la condena. Claro que hay muchos otros medios de gracia. Sólo quisiera en este contexto todavía mencionar la carta de desconfiscación, que anula la confiscación de bienes. Revocación de destierro permite a un condenado regresar rehabilitado en su ambiente natural, después de la sentencia y en la mayoría de los casos después del cum-

plimiento parcial de la pena. En principio las cartas de perdón se conceden en asuntos de complicidad activa o pasiva en un delito de violencia, incluso complicidad en un homicidio simple, pero así mismo son concedidas en casos de crímenes en que no hubo muertos <sup>(21)</sup>.

Los príncipes de Flandes usan igualmente el ‘perdón general’. No completamente sin razón se le pone en duda como medio de gracia. En mi opinión el perdón general se puede ver como una combinación de la prerrogativa de gracia y la de legislación. Los soberanos ya se servían en la edad media de la posibilidad de permitir desvíos del *ius commune* en forma de privilegios, *ex certa scientia, motu proprio, no obstante tali lege*<sup>(22)</sup>. A esa base y contando con el apoyo del adagio moderno jurídico *Princeps legibus solutus*, el príncipe neerlandés se considera, según las circunstancias, capaz de desviarse de sus propias ordenanzas generales por medio de dispensaciones ‘a pesar del rigor de la ley’ <sup>(23)</sup>. Diferente a los medios de gracia, que son concedidos a individuos expresamente nombrados, el perdón general o -con la palabra actual- la amnistía se promulga en favor de un gran grupo de personas culpables de un delito contra el estado. La ordenanza soberana como medio general legislativo es en este período el vehículo más indicado del perdón general. El rey o su gobierno ponen los márgenes, dentro de los cuales los interesados pueden solicitar individualmente cartas de perdón, a pesar de una citación o una condena judicial <sup>(24)</sup>. En caso de insumisión, las cartas de perdón -es cierto- no eliminan ‘el crimen’, pero eliminan la pena o la conmutan por una menos dura, bajo condición de que el implicado se entregue y se muestre arrepentido; por lo demás permiten el regreso a la sociedad, pero no automáticamente a las funciones públicas.

Si el desempeño de la prerrogativa de gracia por una parte quiere evitar la impresión de arbitrariedad y por otra parte quiere reforzar la equidad y la seguridad jurídica dentro de la sociedad, se debe disponer de reglas fijas de procedimiento. En el siglo XVI cuando se comitía un homicidio involuntario, el culpable las más de las veces tratará de escapar a la investigación criminal; empero, si quería reunir las condiciones para uno u otro medio de gracia, debía avisar al juez competente. El autor del homicidio tiene en efecto que evitar que el fiscal admitido le persiga *ipso jure* por asesinato y por consecuencia exija *ex officio* la pena más severa posible en caso de un eventual regreso o descubrimiento del delincuente. Además, si el sospechoso sigue siendo fugitivo, el tribunal solamente podrá condenarlo en rebeldía al destierro <sup>(25)</sup>.

Después de que el acusado o sospechoso, interesado en obtener la gracia, desde su refugio haya indemnizado a la parte perjudicada, dará a un apoderado admitido un mandato para hacer una solicitud en buenos términos jurídicos. Para eso puede suplicar una carta de salvoconducto <sup>(26)</sup>. En la petición que debe dirigir al príncipe, el solicitante reconoce el delito, confesando en una redacción detallada su arrepentimiento y subrayando en extenso los hechos y las circunstancias atenuantes, familiares y personales. Exageración o flagrante contradicción y retención o falsificación de los acontecimientos pueden perjudicar al solicitante al fin de cuentas <sup>(27)</sup>, porque durante la fase preliminar a la decisión y así mismo durante la fase de ejecución, la petición se examina y se compara profundamente con los hechos. Basándose en sus propios autos, el fiscal del *locus delicti* puede emitir un aviso negativo <sup>(28)</sup>. Desde 1504 las solicitudes de gracia son exa-

minadas y eventualmente concedidas por el Consejo Privado por medio de una carta patente *ad hoc*. Si una petición fuera rechazada, el Consejo daría al tribunal autorizado la orden de 'hacer justicia según la acción penal del fiscal competente' <sup>(29)</sup>.

Después de la concesión del medio de gracia sigue, esta vez durante un pleito de registro, una segunda prueba judicial. El que recibe la gracia debe él mismo iniciar el procedimiento con la corte provincial del *locus delicti* <sup>(30)</sup>. Este tribunal verifica la reacción de la solicitud sobre los hechos punibles con la narración a su disposición en los autos del propio fiscal. En caso de que hubiera sido engaño el procedimiento puede concluir con la anulación completa del medio de gracia. Y el impostor no sólo es condenado a la apertura de la causa penal normal sino también al pago de los gastos del pleito de registro e incluso a una pena adicional. En el otro caso después de haber pagado los gastos de la escribanía, del derecho de timbre y la multa civil, la gracia es declarada válida.

Aunque todas las cartas de gracia pudieran ser anuladas formalmente durante el procedimiento de registro, en la práctica de la gracia en materias penales solía arreglarse bien. En el archivo de la corte de Holanda casi no se encuentran rechazos de registro. En Artesia la cantidad de declinaciones por la corte de justicia provincial no superaba el 4 %. De esto provisionalmente creo poder deducir, que las cartas de gracia en casos penales eran generalmente consentidas por los tribunales provinciales. Sin embargo se deben hacer más investigaciones para confirmarlo con toda seguridad <sup>(31)</sup>.

Los medios de gracia no sólo manifiestan el poder soberano, sino actúan también como una red de seguridad para los numerosos crímenes de violencia que de una manera u otra no serían perseguidos por parte de un aparato de investigación deficiente. Para los delincuentes fugitivos es un medio para poder regresar a su comunidad y en todos sus derechos. La gracia es por consiguiente también un instrumento jurídico para enfrentarse a los crímenes de violencia. Haciendo uso de esta prerrogativa, el monarca transforma desorden en orden, derramamiento de sangre en un elemento de misericordia y venganza en defensa propia legal <sup>(32)</sup>, todo lo cual sirve al interés común. El *supremus iudex* guarda a la vez mejor relación con el viejo papel de reconciliador que con el de castigador y toma en cuenta motivos de justificación o circunstancias atenuantes e incluso buena conducta y moral en el pasado <sup>(33)</sup>.

## II. LA POLÍTICA DE GRACIA DE CARLOS V Y FELIPE II

Con la otorgación de gracia por el príncipe y su gobierno no se trata de dar de vez en cuando esplendor a la Semana Santa, un día festivo cristiano u otro feliz acontecimiento, sino que resulta ser una intervención muy común. En cuanto al número de ruegos de gracia a que el príncipe en su Consejo Secreto ha accedido, disponemos de algunos datos aproximados con relación a las provincias de Holanda, Zelanda, Flandes y Artesia. En la expectativa de resultados completas de una investigación corriente, las cifras ya permiten la tesis siguiente. Aunque el soberano pueda concederla en un caso y rechazarla en otro, la práctica es que el gobierno central se sirve generosamente de la gracia, particularmente con delincuentes acusados de violencia grave. En la provincia de Artesia —una provincia francófona en el sur de Flandes— durante todo el período, por

lo menos un de 1 % de todos los habitantes adultos masculinos acusados o sospechosos de crímenes de homicidio incluso de asesinato recibieron la gracia; un 2 % de las familias han estado directamente en contacto con un caso de indulto <sup>(34)</sup>.

Cuando los duques de Borgoña otorgaban en todo el siglo XV en la pequeña provincia de Artesia 301 indultos, considerándose esto como bastante cicatero, durante la primera mitad del siglo XVI, se conceden en medio siglo tres veces más. Entre 1523 y 1562, unos cuarenta años, el consejo provincial de Holanda ha registrado aproximadamente dos mil cartas de indulto y cartas de perdón para las provincias de Holanda y Zelanda. En los años 1543 hasta 1555 la corte de justicia de las provincias de Flandes Flamingant y Flandes Galicant alcanza hasta un promedio por año de cientoveinticinco registros de indultos <sup>(35)</sup>.

Las cifras conocidas hasta el momento solamente pueden ser indicativas para la totalidad de los Países Bajos bajo la reino de Carlos V y Felipe II. Permiten sin embargo deducir provisionalmente y con prudencia que, salvo de la justicia y la política principesca, también el derecho de gracia del soberano avanzó en las provincias centrales, Brabante con Malinas, Holanda, Flandes y Zelanda, y aún incluso en un par de provincias de la periferia valona; excepto en las provincias rurales orientales, la justicia privada, las composiciones y la práctica eventual de gracia local parecen haber dejado lugar al derecho de gracia del príncipe <sup>(36)</sup>.

No sólo los que cometen un homicidio u otro crimen de violencia, sino también sospechosos y acusados del 'crimen de herejía', si por lo menos muestran arrepentimiento, se benefician de los favores principescos <sup>(37)</sup>. Es cierto que faltaba una colaboración entre los inquisidores eclesiásticos y las cortes civiles, existían las disputas de competencia entre los tribunales locales y los provinciales e incluso la negligencia, interpretación y suavidad de los jueces llevaron muchas veces a la obstrucción; pero además el gobierno de Carlos V, por consideraciones políticas realistas, se deja inducir por una política de clemencia en casos de partidarios de nuevas religiones. En la lucha contra los enemigos de la religión católica, se promulga en 1534 la orden de mandar a vagabundos y herejes a España para servir en las galeras <sup>(38)</sup>. Cada más, herejes arrepentidos entran regularmente en consideración para cartas de perdón, aunque, según la doctrina jurídica y el derecho positivo de la época, el delito en cuestión en el peor caso, podría ser interpretado como *crimen laesae majestatis*; para el cual en principio la sentencia sería la pena mortal y la confiscación de bienes <sup>(39)</sup>.

En contraste con los delincuentes de derecho común, los herejes que se arrepientan, buscan desde la prisión a un apoderado admitido para redactar su petición de gracia y abjurar su doctrina errónea delante de un inquisidor. Como en las otras cartas de gracia, el favorecido debe pagar los gastos acostumbrados y cumplir la penitencia impuesta; las cortes provinciales de justicia se encargan igualmente del registro de las cartas de perdón.

Hasta incluso anabaptistas contrictos regularmente son perdonados, aunque según las ordenanzas de los años treinta no puedan contar con clemencia y se prohíba pedir gracia para ellos; sin dilación serían sentenciados a la muerte por la hoguera. Por las tendencias revolucionarias de la primera generación de anabaptistas, siguen siendo tomados por uno de los mayores peligros para el estado y para el orden social, porque

más que otras confesiones protestantes pisotean los valores fundamentales de la sociedad <sup>(40)</sup>. Sin embargo, a pesar de las ordenanzas de los años treinta y a pesar de su mala fama, en 1534 por ejemplo 430 anabaptistas holandeses son indultados bajo la condición de arrepentimiento público y de una sanción simbólica. Obedeciendo a mensajes de salvación socio-políticas, navegaron a Münster, pero habían hechos presos entre abril y diciembre de 1534 en el Mar del Sur. En los dos años siguientes otra vez 44 y 37 anabaptistas gozan de gracia bajo la condición de penitencia pública. Anabaptistas arrepentidos alegan en sus peticiones 'simplicidad e ignorancia', 'palabras hermosas y sutiles' u 'obediencia al dueño de casa' que les seducieron para asistir a conventículos anabaptistas y otras razones específicas similares de exclusión de culpabilidad por sus pasos falsos <sup>(41)</sup>.

Bajo el gobierno de la gobernadora general María de Hungría se repiten varias veces ordenanzas generales que permiten un plazo de dos o tres semanas en casos de peticiones de indulto por protestantes. Hasta incluso después de promulgar el primer placarte verdaderamente severo del 22 de septiembre de 1540, que entre otros excluye al pie de la letra 'definitivamente' a todos los heterodoxos del derecho de gracia y que manda la condena automática en contumacia de los protestantes fugitivos, se perdona a herejes arrepentidos <sup>(42)</sup>. Con una circular general, el gobierno en Bruselas repite llamando la atención de los gobernadores provinciales sobre las posibilidades existentes de perdón para protestantes contritos; lo único que deben hacer es formular una solicitud, por la cual la gobernadora general *-de facto* el Consejo Secreto- toma la decisión si la persona en cuestión puede ser perdonada.

En la carta que acompaña al famoso edicto del 29 de abril de 1550 contra la herejía, ordenando a las cortes provinciales de justicia a publicarlo, de parte de Carlos V se les señala otra vez las facilidades de gracia; poco tiempo después se retira para protestantes arrepentidos la prohibición oficial de perdón de hacía diez años. Poco antes de la abdicación de Carlos V -entonces desconocida-, el gobierno facilita todavía mucho la demanda de perdón para los heterodoxos, por consentir a los consejos provinciales de justicia incluso a los tribunales locales en consulta con los dichos consejos, aceptar las peticiones de los interesados y decidir ellos mismos sobre ellas.

El emperador Carlos y su gobierno no dejan de sacar buen partido de su clemencia. A los herejes indultados, además del pago de los gastos judiciales, se les impone una pena simbólica o una penitencia pública, como rogar de rodillas el perdón; además deben participar públicamente en la próxima procesión 'en sus paños menores con una candelá encendida en la mano' <sup>(43)</sup>.

Las investigaciones sobre la política de gracia del emperador Carlos como señor de Flandes, confirman de nuevo que sus ordenanzas represivas antiprotestantes formaban sobre todo un marco teórico. No existe ni la más mínima duda que Carlos V mismo quiso la aplicación correcta de su legislación contra el protestantismo. Sin embargo, la mayoría de sus magistrados juristas en los consejos centrales y provinciales, en los que se había redactado o aprobado la legislación antiprotestante, opinaba -como en 1527 el Gran Consejo de Malinas, una de las cortes superiores- que había que condenar sólo a los que la hubieran quebrantado, pero no a los que *pensaban* de manera 'enferma o deficiente' en cosas de doctrina y de sacramentos de la iglesia católica romana <sup>(44)</sup>.

El gobierno en Flandes ha apoyado el poder del emperador Carlos V como príncipe de los Países Bajos gracias a la combinación de represión y de gracia. De esta manera en lugar de sembrar resistencia aplicando severidad, quitaba las armas a la oposición. Por lo que sabemos sobre la aplicación de gracia por parte de Felipe II, su reino aparece contrastando en gran medida con la de su padre y antecesores; las investigaciones en este terreno hasta ahora parecen completar y confirmar la visión global sobre el régimen filipino en otros terrenos de la historia de Flandes. El emperador había dejado a su gobierno el espacio no solamente para conceder la gracia a delincuentes y heterodoxos, sino también para elaborar varias ordenanzas de gobierno sobre las múltiples formas de gracia y para perfeccionar la técnica de los medios de la gracia (entre otros las ordenanzas 2 de mayo de 1523, 20 de agosto de 1527, 11 de enero de 1528 y 20 de octubre de 1541, 19 de mayo de 1544 y 17 de agosto de 1546) <sup>(45)</sup>. Al contrario, durante la primera década y media de su reino, en este medio jurídico importante del poder el rey Felipe II no parece muy interesado, sino al contrario; descuida la gracia en materias penales, hasta incluso se opone a su aplicación generosa.

El único trabajo legislativo que durante el gobierno de Felipe II se realiza en relación con la gracia en causas de derecho común, son algunos artículos en el marco de las reputadas Ordenanzas Criminales de julio de 1570. Forman un código penal monumental de derecho material y formal de altísimo nivel. Pero no eran trabajo legislativo por orden del rey, sino obra del Consejo Secreto de Flandes en el marco de un asunto, ordenado en octubre 1531 para codificar y homologar el derecho consuetudinario de todos los Países Bajos. La concertación con el monarca Felipe II sobre el asunto se limita apenas a unas breves comunicaciones del duque de Alba como gobernador general, que las ordenanzas en cuestión serían promulgadas muy pronto <sup>(46)</sup>.

La intención de las Ordenanzas Criminales de 1570 es la substitución de las innumerables costumbres locales y regionales en materia criminal e incluso de las leyes penales proclamadas en orden disperso por un solo código penal y otro procesal. Entre otras cosas se garantizan castigos más justos, más precisos y menos arbitrarios e incluso un desarrollo del proceso criminal bien ordenado. Además estas Ordenanzas Criminales elevan el derecho docto -derecho romano y derecho canónico- expresamente como principio vigente en casos de lagunas o incertitudes en las costumbres jurídicas. Los nuevos códigos penales contienen medidas para mayor protección jurídica de los delincuentes sospechosos, de las cuales no pueden derivar derecho las personas acusadas de heterodoxia y otras citadas ante la justicia de excepción; lo que en el caso implica que el tribunal no debe observar el orden y la forma de los procedimientos válidos. Aún el privilegio de exención de confiscación de bienes como pena, que favorece sobre todo a la alta nobleza, es suspendido <sup>(47)</sup>.

En lo que toca a la otorgación de gracia, las Ordenanzas Criminales de 1570 confirman la efectuación de diversas reglas y tendencias consuetudinarias que ya se aplicaban bajo Carlos V. Algunas determinaciones especifican y agudizan las formulaciones del procedimiento de demanda en materias de gracia. Formalmente se pone término a todas las composiciones o acuerdos amistosos, si aún existen. Comprueban por lo demás que muchos señores y autoridades locales conceden aún gracia en delitos menores y crímenes no calificados, los cuales no se castigan con la pena mortal o confisca-



ción de bienes; estas costumbres así mismo son abrogadas. Aunque todavía haya otras autoridades públicas concediendo la gracia en delitos graves de violencia, no obstante la práctica y a pesar de las ordenanzas de los duques de Borgoña y de Carlos V, las Ordenanzas Criminales no dejan ninguna duda sobre eso: 'gracia solamente tiene que emanar de la persona del príncipe, quién la reserva a sí mismo o al gobernador lugarteniente o a ellos que se han cometido a ésto'.<sup>(48)</sup> Confirma el código que 'el príncipe concede gracia, cuando algunas circunstancias mitiguen y justifiquen el delito o el crimen de modo que de pleno derecho [el monarca y su gobierno central] pudieran moverse para aliviar la pena capital o el rigor de la justicia o de la ley' <sup>(49)</sup>. Se reafirman las ordenanzas de Carlos V de 1541, 1544 y 1546, según las cuales en el marco del procedimiento inquisitorio el fiscal tiene el deber de constituir cuidadosamente los autos, inmediatamente después del acto de violencia y conservarlos luego en secreto, para poder recurrir al expediente en el tiempo necesario, entre otras cosas cuando una petición de gracia era presentada <sup>(50)</sup>.

Igualmente faltan bajo Felipe II medidas legislativas que hubieran favorecido la demanda de indulto a los herejes que se arrepentían, como acabamos de ver bajo Carlos V. Aún más se suprimen las ordenanzas existentes. En el año anterior a su partida de Flandes para volver a la península, Felipe II ya hace decretar ordenanzas que excluyen de todas formas a los anabaptistas del derecho de gracia como fue permitido por Carlos V. Al salir del país, en 1559, el rey Felipe ordena la vigilancia estricta de las ordenanzas represivas de su padre contra el protestantismo. Los gobernadores y las cortes provinciales de justicia reciben la orden de cumplir sin compasión, inexorablemente y sin distinción alguna la ejecución de las sentencias contra todos los protestantes. El Edicto Perpetuo del 7 de febrero de 1562 considera a los heterodoxos como perturbadores del orden público y los excluye explícitamente de cualquier perdón de penas <sup>(51)</sup>. El privilegio carolino de tolerancia en cuanto a los mercaderes extranjeros ya había sido abrogado año y medio antes.

Salvo en lo relativo a la aplicación estricta de la legislación antiprotestante y al control severo, las ordenanzas y placartes filipinos para la defensa de la religión católica no introducen materialmente muchas reglas nuevas. Hasta contienen cláusulas que garantizan la seguridad jurídica de los presuntos protestantes, al definir más detallada y claramente los grados de pena, y al introducir destierro y multas como sanciones. En realidad las medidas filipinas de control de los individuos son experimentadas como un verdadero atentado a la libertad cotidiana de los individuos, a diferencia de las usanzas anteriores más erasmistas en una sociedad donde la regulación y presión policial hasta entonces eran mínimas <sup>(52)</sup>.

Sin embargo, a mi parecer no se le pueda colgar el sambenito completamente al rey Felipe. La responsabilidad del gobierno en Bruselas y sobre todo del jurista frisón Viglius van Aytta en los años 1561-1564 por lo visto no es insignificante. Como partidario de una lucha penal contra el protestantismo según los principios humanistas nórdicos de equidad y moderación, se había opuesto vigorosamente contra el propósito de Carlos V para agudizar en 1550 la persecución de los protestantes. Defendiendo severidad sólo contra los perseverantes, estaba Viglius en su función de jefe-presidente del Consejo Secreto entonces en favor de misericordia con respecto a los arrepentidos o a

los que por descuido se habían equivocado <sup>(53)</sup>. Al contrario, en los años siguientes al regreso de Felipe II a las Españas, cuando el interés regio por Flandes se había desviado, teniendo serios problemas en casa con su hijo Don Carlos, dificultades para controlar el gobierno en Castilla y bastante que hacer con la guerra contra los turcos en el Mediterráneo <sup>(54)</sup>, el principal consejero de Margarita de Parma y Granvela que era Viglius, redacta las ordenanzas y placartes antiprotestantes y toma la entera responsabilidad política de esta legislación. Como jefe-presidente igualmente determina la otorgación de gracia al pie de la letra esbozada por el rey ausente <sup>(55)</sup>. No se conoce reacciones del jurista humanista en contra, aunque en la materia hubiera tenido la simpatía y apoyo de la oposición leal noble en el Consejo de Estado y probablemente de muchos otro. A Viglius empero el ímpetu revolucionario del protestantismo reformado le infunde miedo; teme la vulneración del orden establecido y radicaliza su posición. En la última fase del Concilio de Trento domina el pensamiento de la confrontación y, salvo España, en diversos países europeos varias formas de heterodoxía navegan con viento en popa <sup>(56)</sup>.

Proposiciones de autoridades episcopales y seculares, de destacados juristas y teólogos, la famosa petición del Compromiso de Breda que se presenta a la gobernadora general Margarita de Parma el 5 de abril de 1565, e incluso una animación para clemencia y moderación del importante filósofo español Fadrique Furió Ceriol, no son oídos por el rey. La abolición de la hoguera y la sustitución por la decapitación o la horca es apenas visto como un alivio. Tras alarmantes protestas de la gobernadora general y del Consejo de Estado de Flandes que incluso envían delegaciones al monarca en España, el rey mismo abre en mayo de 1566 sólo un requicio, con la promesa de recibir benignamente peticiones de gracia de personas claramente engañadas quienes quieren abjurar sus errores; todos los demás, hasta herejes contritos, de antemano son excluidos de esta benevolencia. En agosto siguiente, precisamente cuando el monarca se resuelve por una amnistía a los miembros del Compromiso de los nobles -con excepción de algunos líderes- estalla la iconoclastia. El perdón general no se promulga por orden de Felipe II y se toma la decisión de mandar al duque de Alba a Flandes para reprimir toda la resistencia. Y aún antes de la llegada del duque se retira la promesa de clemencia de mayo anterior: antes del regreso del rey a Flandes, ya proyectado y esperado desde 1563, no se concederá ningún perdón por 'crimen de herejía'. Igualmente el edicto de mayo 1567, promulgado por el gobierno en Bruselas, decretando a los protestantes activos de elegir entre el plazo de veinte y cuatro horas para salir del país o la pena de la horca, se deroga por orden regio en julio siguiente <sup>(57)</sup>.

No solamente con respecto a la política regia contra el protestantismo, sino también en consideración de la lucha contra la criminalidad violenta ('homicidios y otros casos enormes'), Felipe II ordena al gobierno en Bruselas usar una política represiva y a servirse escasamente de la gracia <sup>(58)</sup>. En 1564 un placarte restringe la carta de salvoconducto a un plazo de seis semanas; entre los criminales sólo aquellos que cometan homicidios simples y robos podrían apelar a ello. Seis años más tarde, el suministro de salvoconductos se prohíbe completamente para 'personas criminales'. Esta interdicción lo hace para delincuentes sospechosos fugitivos muy difícil, sinó casi imposible, de pedir cartas de gracia. Este artículo cuadra en las dichas Ordenanzas Criminales de 1570.

La realidad parece confirmar las normas. Desde 1562 en el archivo de la Corte provincial de Holanda los registros de gracia se hacen escasos. También en Artesia se reduce el número de indultos y perdones registrados bajo el gobierno del rey Felipe hasta 536, mientras que en la primera parte del siglo XVI aún se registraban 927. Después de 1559 la cantidad de ejecuciones sobre todo por ‘crímenes de herejía’ alcanza altitudes nunca vistas previamente <sup>(59)</sup>.

Aún más, en pocos años, el gobierno del duque de Alba en Flandes deja una huella de 1.073 ejecuciones y de 11.130 sentencias, que condenan a los huídos por razones políticas y religiosas a destierro eterno y confiscación de sus bienes. Entre otras, la decapitación de los estimados condes de Egmond y de Horn en la *Grote Markt* (Plaza Mayor) de Bruselas, la estrangulación furtiva del hermano de Horn, el barón de Montigni, en el castillo-archivo de Simancas, por *crimen laesae majestatis* y rebelión, las confiscaciones, los procesos secretos ante una justicia de excepción y la severidad de los veredictos indignan y excitan los ánimos <sup>(60)</sup>. El rey no había hecho ningún caso del ya dicho ruego de la mujer de Egmond por haberse introducido ‘sin carta ni sabiduría’ del duque de Alba <sup>(61)</sup>. El conde mismo formalmente no pide gracia, pero en su última carta escrita el día de su ejecución, ‘prest à morir’, ruega el conde a Su Majestad ‘me le pardonner et avoir pitié de ma povere femme et enfans et serviteurs, vous souvenant de me services passees’ <sup>(62)</sup>. Preguntando en el cadalso al coronel Julián Romero, responsable de la ejecución de los condes, si no hubiera perdón, muestra Egmond que hasta el momento supremo de su decapitación en sus adentros hubiera esperado el perdón real <sup>(63)</sup>. El soberano no concede la gracia sin petición formal en que se reconoce el crimen en cuestión. A la demanda del duque de Alba, pocos días más tarde, a favor de la condesa Egmond y sus hijos que el rey ‘se apiade dellos y les haga merced conque puedan sustentarse’, Felipe II le encarga medio año después de concederles diez mil florines al mês, pero nadie puede saber ‘que lo haceis por mi orden’ <sup>(64)</sup>. La notificación del favor hubiera parecido como un acto de debilidad.

Aunque sepamos ahora que ni la reorganización eclesiástica ni las nuevas ordenanzas antiprotestantes de Felipe II tenían que ver con la Inquisición española, es difícil negar que ha preferido un regreso al derecho represivo del estado. El rey considera el protestantismo inseparablemente unido a infidelidad al príncipe, a la patria y al *salus populi*, en una palabra: rebelión. Con el ideal de destacarse cada vez más, según las ideas de la época, como el brazo secular armado de la Iglesia Católica, está convencido de la eficacia de la persecución severa, así mismo y especialmente en relación con los herejes <sup>(65)</sup>.

Contrariamente al gobierno de su padre, hasta 1572 el de Felipe II no sabe servirse de los medios de gracia ni de leyes de amnistía para reintegrar a los ‘elementos malos’ en la sociedad. En su mente, sólo conviene castigar ‘aquellos malos hombres’ y ‘rebel-des con el rigor y severidad que sus culpas merescen’ <sup>(66)</sup>. Hasta entonces la presencia y actuación del duque de Alba dejan poco espacio para la clemencia, tampoco cuando el rey descubre de nuevo el medio de la misericordia y su papel de reconciliador, com-biándolo con su papel de castigador: primero la pena y sólo después eventualmente la gracia.

El primer perdón general publicado de 16 de julio de 1570 <sup>(67)</sup> no es incondicional y

contiene una larga lista de categorías de excepciones y restricciones; falta una clara distinción sobre quién sí y quién no. ¡Por lo demás las peticiones de gracia debían ser dirigidas al Consejo de los Disturbios! En el ambiente de represión y de guerra, la misericordia real suscita desconfianza, así que pocos piden gracia. Los suscriptores del Compromiso de los Nobles que dos años antes habían aceptado la convocatoria de Alba para presentarse espontáneamente al tribunal de excepción dentro de un mes para poder beneficiarse de un eventual perdón, se encontraron cogidos en una emboscada: no salieron ilesos. A fin de cuentas, incluso por causa de su política de gracia extremadamente restrictiva, Felipe II provocó discordia, disturbios e incluso sublevación. Su política represiva debilitó la lealtad de la alta nobleza, de la aristocracia, de los funcionarios juristas y de los magistrados municipales a su soberano <sup>(68)</sup>.

Sólo cuando el fracaso del duque de Alba era evidente, el rey intentó reparar el daño promulgando perdones generales. Es cierto, las ordenanzas generales de amnistía promulgadas posteriormente contienen sólo relativamente escasas excepciones <sup>(69)</sup>, pero llegan demasiado tarde. Solamente dan resultados limitados; pocos protestantes huídos y rebeldes regresan. Eso vale también para el perdón general del 8 de marzo de 1574 bajo el gobernador general Don Luis de Requeséns y Zúñiga y más tarde lo mismo para el tratado de reconciliación bajo Alejandro Farnesio, príncipe de Parma, en 1579.

Después del inesperado fallecimiento de Requeséns en marzo 1576 cae todo el país -con excepción de Luxemburgo, Limbourg-sur-Vesdre y Namur- de facto en manos del gobierno rebelde. Y se respeta solamente de forma ficticia a la soberanía de Felipe II. Con la Pacificación de Gante los 'Estados Generales' sublevados usurpan en nombre del rey Felipe la prerrogativa de gracia, poniendo fuera de función todas las leyes anti-protestantes y promulgando una verdadera amnistía colectiva y completa devolución de los bienes confiscados. Numerosos desterrados aprovechan la ocasión para regresar al país <sup>(70)</sup>.

En el tratado de reconciliación con las provincias valonas <sup>(71)</sup> de 1579 Felipe II reconoce la Pacificación de Gante en todo lo que no esté en contradicción con su propia soberanía. En la esperanza de que las demás provincias neerlandesas las siguieran, se reconcilia el rey con las ciudades y provincias valonas por medio de un tratado bilateral, bajo la condición de reconocimiento de su soberanía y del monopolio de la Iglesia Católica Romana. A los altos nobles y otros personajes de alguna importancia que quisieron reconciliarse con él, les otorgó cartas de perdón y de desconfiscación, eventualmente les restituyó sus funciones políticas <sup>(72)</sup>.

En las ciudades sublevadas de Brabante y Flandes Flamingant con una minoría importantísima de protestantes <sup>(73)</sup>, que en 1581-1588 poquito a poco deben capitular delante de las tropas regias, se concede a los habitantes algunos meses de reflexión antes de aprovecharse de la amnistía bajo condición de su rendición a las normas del rey y de la Iglesia Católica o de vender sus propiedades y marcharse. Los que prefieren quedarse, pero que no pueden conformarse con las condiciones impuestas, toman el riesgo de las sanciones previstas por 'crimen de herejía'. Al restablecer y repetir las ordenanzas y placartes represivos en asuntos religiosos, hasta 1597 hay sólo esporádicamente protestantes que son ejecutados en la hoguera <sup>(74)</sup>. Por la fuga de decenas de miles de personas a las 'provincias libres' de Holanda y Zelanda que siguen conti-

nuando sublevadas, no hace falta una represión severa. También católicos liberales se sirven de la posibilidad de irse por razones políticas y económicas; el temor a la vuelta de un régimen espiritual sin libertad les da sobre todo una sensación de inseguridad<sup>(75)</sup>.

Manteniendo el rey sus ideas sobre una otorgación escasa de cartas de gracia tanto respecto a los herejes como a los delincuentes de derecho común, reprende al gobernador general cuando se entera Felipe II de alguna -según su gusto- generosidad en asuntos de gracia de parte del gobierno regio<sup>(76)</sup>. Comparado con la época carolina, las cantidades de medios de gracia siguen siendo muy inferiores y esto no sólo por la pérdida de territorios. Después de la muerte de Felipe II, son por la primera vez los Archiduces, quienes al entrar en 1599 en el país reanudan la tradición carolina en la materia<sup>(77)</sup>.

## CONCLUSIÓN

Según la literatura existente las monarquías fuertes hacen uso de su derecho de gracia, como uno de los pilares más eficaces del poder soberano. Por medio de la gracia pueden los soberanos igualmente aumentar la constitución y el poder estatal, o por lo menos sostenerlo. Eso no es sólo el caso de los monarcas en Castilla, Francia e Inglaterra, sino también en los Países Bajos de los duques de Borgoña y aún más del emperador Carlos V. Conforme al ejemplo de los reyes Valois en Francia, los príncipes de Flandes se sirvieron con gran frecuencia de su derecho de gracia. Por consiguiente salieron al encuentro de los deseos de los justiciables que se sometían a su juicio mediante una petición, a la cual los tribunales consuetudinarios no podían satisfacer. Al mismo tiempo expresaban los príncipes su preponderancia con respecto a los tribunales consuetudinarios regionales y locales. Por medio de las peticiones de gracia los particulares en cuestión impulsaron la extensión del poder del soberano, y de esta manera la recibieron y expresaron su consentimiento por ella.

El régimen de Carlos V, como señor de los Países Bajos, se aprovechó enteramente de esta prerrogativa tanto en favor de delincuentes y criminales, como de protestantes, tomando en cuenta circunstancias atenuantes internas y externas, respectivamente: reconocimiento de error y arrepentimiento. Con sus generosas otorgaciones de indulto y de perdón, el gobierno del emperador sostuvo probablemente su poder. Al contrario, el rey Felipe II quizás no dejó a su gobierno en Bruselas bastante espacio para una política de gracia. Sin embargo posiblemente, a mi parecer, los consejeros con influencia en el gobierno en Bruselas no se sirvieron suficientemente de sus competencias en períodos que el rey ausente tenía otras cosas en la cabeza; o bien estaban de acuerdo con la línea política esbozada por el monarca en estos años de mayor confrontación con la heterodoxia. De todas formas, se usó mucho menos del derecho de gracia que bajo Carlos V. Al contrario creían el rey y su gobierno en la eficacia de una política represiva. Por consiguiente me atrevo a suponer, que Felipe II así mismo debilitó su poder por hacer un uso muy escaso de su prerrogativa de gracia. Y por eso provocó desorden, resistencia e incluso sublevación. Las medidas tardías de perdón general en los años setenta y ochenta tuvieron poco éxito.

## NOTAS

- \* Agradezco mucho al licenciado Yoop de Wolf, colaborador científico al Instituto de Historia Moderna de la Universiteit Nijmegen, por su ayuda especialmente documental.
- <sup>(1)</sup> Salustiano de Dios, *Gracia, merced y patronazgo real. La cámara de Castilla entre 1474-1530* (Centro de estudios constitucionales; Madrid 1993) passim. Compárese J. Arrita Alberdi, 'Justicia, gracia y gobierno en la Castilla bajomedieval y moderna: dos recientes aportaciones', *Pedralbes. Revista d'història moderna* 16 (Departament d'història moderna - Universitat de Barcelona 1996) 225-236.
- <sup>(2)</sup> J. Foviaux, *La rémission des peines et des condamnations. Droit monarchique et droit moderne* (Travaux de recherches de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Paris, Reeks: Sciences criminelles, núm. 2; París 1970); P. Texier, *La rémission au XIV<sup>e</sup> siècle. Génèse et développement* (Université de Limoges - doctorat d'état inéd.; Limoges 1991); A. Logette, *Le Prince contre les juges. Grâce ducale et justice criminelle en Lorraine au XVIII<sup>e</sup> siècle* (Col. Centre lorrain d'Histoire du Droit; Nancy 1994); I. Paresys-Degorge, *Pardonner et punir. Justice criminelle et construction de l'obéissance en Picardie et en Ile-de-France sous François I<sup>er</sup>* (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne - doctorat inéd.; París 1995).
- <sup>(3)</sup> H. de Schepper y J.M. Cauchies, 'Legal Tools of the Public Power in the Netherlands, 1200-1600', en: A. Padoa Schioppa (ed.), *Legislation and Justice* (The Origins of the Modern State in Europe, 13th-18th Centuries, Theme C; Estrasburgo/Oxford 1997) 229-68 (véase p. 258-259); versión extensa: *Justice, grâce et législation. Genèse de l'état et moyens juridiques dans les Pays-Bas, 1200-1600* (Centre de recherches en histoire du droit et des institutions. Cahiers núm. 2; Bruselas 1994) 130 p. (véase p. 62-66).
- <sup>(4)</sup> P. Duparc, *Origines de la grâce dans le droit pénal romain et français du Bas-Empire à la Renaissance* (Université de Paris - Faculté de Droit; París 1942) 55-57; J. van Herwaarden, *Opgelegde bedevaarten. Een studie over het opleggen van bedevaarten in d Nederlanden in de late Middeleeuwen, ca 1300-ca 1550* (Assen 1978) 48-52; F. Vanhemelryck, *Misdadigers tussen rechter en beul, 1400-1800* (Amberes/ Amsterdam 1984) 45-47; P.C.M. Hoppenbrouwers, *Een Middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden, ca. 1360-ca. 1515* (Sección Agrarische Geschiedenis - Landbouwwuniversiteit, núm. 32; Wageningen 1992) I, 205-213; D.A. Berents, *Misdaad in de Middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht* (Stichtse Historische reeks, núm. 2; Zütphen 1976) 56-79.
- <sup>(5)</sup> J. van Rompaey, 'Het compositierecht in Vlaanderen van de veertiende tot de achttiende eeuw', *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* XXIX (1961) 43-79; Van Herwaarden, *Opgelegde bedevaarten* 18-21; L. Hovy, 'Schikking in strafzaken in Holland tijdens de Repblik', *Nederlands Archievenblad* 84 (1980) 413-429 (véase p. 413, 417); M. Boone, "'Want remitteren is princelijck." Vorstelijk genaderecht en sociale realiteiten in de Bourgondische periode', en: L. van Parys y o. (eds.), *Liber Amicorum Achiël de Vos* (Evergem 1989) 53-59 (véase p. 54-55); B.C.M. Jacobs, *Justitie en politie in 's Hertogenbosch vóór 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad* (Assen/Maestrique 1986) 110-111; H.A. Diederiks y H.W. Roodenburg (eds.), *Misdaad, zoen en straf* (Hilversum 1991) 11-25.
- <sup>(6)</sup> L.Th. Maes, *Vijf eeuwen stedelijk strafrecht. Bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden* (Amberes/La Haya 1947) 79-81; .
- <sup>(7)</sup> J. Dauwe y J. Monballyu (eds.), *J. de Damhouder. Practycke ende handbouck in criminele zaecken etc.* (Roeselare 1981) 132.
- <sup>(8)</sup> H. de Schepper y M. Vrolijk, 'Vrede en Orde door Gratie in Holland en Zeeland onder de

Habsburgers en de Republiek, 1500-1650', en: M. Bruggeman y o. (eds.), *Mensen van de Nieuwe Tijd. Een liber amicorum voor A. Th. van Deursen* (Amsterdam 1996) 98-117 (véase p. 98-100).

- <sup>(9)</sup> Duparc, *Origines de la grâce* 65-66, 80, 148-150; X. Rousseaux, 'Ordre moral, justices et violence: l'homicide dans les sociétés européennes, XIIIe-XVIIIe siècle', en: B. Garnot y R. Fry (eds.), *Ordre moral et délinquance de l'antiquité au XXe siècle. Actes du colloque de Dijon, 7 et 8 octobre 1993* (Dijon 1994) 65-82 (véase p. 73); Ph. Godding, 'Les lettres de justice, instrument du pouvoir central en Brabant, 1430-1477', en: *Miscellanea Roger Petit* (Archief- en bibliotheekwezen in België, XLI; Bruselas 1990) 384-402 (véase p. 401-402).
- <sup>(10)</sup> Ch. Petit Dutailly, *Documents nouveaux sur les mœurs populaires et le droit de vengeance. Lettres de rémission de Philippe le Bon* (París 1908) passim.
- <sup>(11)</sup> Jean Bodin, *Six livres de la République* (París apud Jacques du Puy 1578) 164-173; A. Orts (ed.), *Filips Wielant. Practijke criminele* (Maatschappij der Vlaamsche bibliophielen, 3a serie, núm. 15; Gante 1872) 191; P.A.J. van den Brandeler, *Het recht van gatie volgens ons vroeger en hedendaagsch staatsrecht* (La Haya 1880) 29; Duparc, *Origines de la grâce* 77-78, 81-83; H. Krause, art. 'Gnade', en: A. Erler y E. Kaufman (eds.), *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte* t. I (Berlín 1971) col. 1714-1719 (véase col. 1717-18); Foviaux, *La rémission des peines* 50-51.
- <sup>(12)</sup> Decisión del Consejo Secreto, 19 diciembre 1550 (Algemeen Rijksarchief Bruselas [abrev. ARB.], *Geheime Raad. Registers* [abrev. Geh. R. Reg.], núm. 671, f. 84vo-85ro); cartas de indulto y perdón (ARB., *Geheime Raad. Spaanse tijd* [abrev. Sp. Geh. R.], úm. 894, passim): 'gracie ende misericorde voir righeur ende strangheyt van justicie', 'vueillant preferer grasce et misericorde a la rig[ui]eur de justice'.
- <sup>(13)</sup> A. Goosens, *Les inquisitions modernes dans les Pays-Bas méridionaux, 1520-1633*, t. I: *La Législation* (Bruselas 1997) 116.
- <sup>(14)</sup> Petición de Sabina de Bavaria al rey, sin fecha [septiembre 1567] (Palacio de Liria Madrid, *Archivo Duques de Alba*, caja 34, núm. 87); carta de Felipe II al duque de Alba, Madrid, el 12 de noviembre 1568 (*ibid.*, caja 5, núm. 70).
- <sup>(15)</sup> Ch. Laurent y J. Lameere (eds.), *Recueil des ordonnances des Pays Bas* t. II (Bruselas 1898) 492; A. van Nieuwenhuysen, 'Les archives d'un chancelier de Brabant au XVIe siècle', en: H. Coppejans y o. (eds.), *Album Wyffels* (Bruselas 1987) 483-493 (véase p. 491-492); H. de Schepper, 'Brabant "Hooftprovincie" en Brussel "Princelycke Hoofdstadt van 't Nederland". De publiekrechtelijke relaties van het gewest tot de regering, 1531-1621', en: Th.E.A. Bosman y o. (eds.), *Brabantse recht dat is ... Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.P.A. Coopmans ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Brabant* (Brabantse rechtshistorische reeks, núm. 5; Assen/Maastricht 1990) 263-270 (véase p. 265-266).
- <sup>(16)</sup> L. de Mecheleer, 'De criminaliteit te Aalst in de late Middeleeuwen', *Het Land van Aalst* t. XLV (1993) 77-130 (véase p. 82-83, 86, 94-95).
- <sup>(17)</sup> Cf. permiso del Consejo Secreto al prevoste de Alkmaar para 'componer', 23 noviembre 1546 (ARB., Geh. R. Reg., núm. 670, f. 143vo-144ro); Laurent y Lameere (eds.), *Recueil des ordonnances des Pays Bas* t. II, 192.
- <sup>(18)</sup> Laurent y Lameere, *op.cit.* t. II, 192-196 y 231-232; J. Lameere y H. Simont (eds.), *Recueil des ordonnances des Pays Bas* t. IV (Bruselas 1907) 325-329; Berents, *Misdaad in de Middeleeuwen* 62; J. Kuys, *De ambtman in het kwartier van Nijmegen, ca. 1250-1543* (Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt instituut, núm. 10; Nimega 1987) 89, 221-224.

- <sup>(19)</sup> Hoppenbrouwers, *Een Middeleeuwse samenleving* t. I, 205-213; Berents, *op.cit.* 56-79; H. de Schepper y M. Vrolijk, 'La grâce princière et la composition coutumière aux pays bourguignons, 1384-1633', en: J. Hoareau-Dodinau y P. Texier, *Mélanges Pierre Braun* (Presses Universitaires Limoges 1998) 733-757 (esp. 739-745).
- <sup>(20)</sup> J. Monballyu (ed.), *Filips Wielant. Verzameld werk*, I: *Corte instructie in materie criminele* (Bruselas 1995) 192; Orts, *Filips Wielant* 93.
- <sup>(21)</sup> Cartas cit. de indulto y perdón; cartas de deconfiscación (ARB., Sp. Geh. R., núm. 824-827); revocaciones de destierro (*ibid.*, núm. 1090-1097). Por ej. revocación de destierro, 8 abril 1548 (*ibid.*, núm. 1090, s.f.); revocación de destierro, 10 julio 1557 (*ibid.*, s.f.); decisión del Consejo Secreto, 20 aug. 1546 (ARB., Geh. R. Reg., núm. 672, f. 11vo); id., 19 dec. 1550 (*ibid.*, núm. 671, f. 84vo-85ro).
- <sup>(22)</sup> H. de Schepper, 'Ensayo sobre el modelo del proceso de decisión política en los Países Bajos de Felipe II, 1559-1598', en: P. J. A. N. Rietbergen y o. (eds), *Tussen twee culturen. De Nederlanden en de Iberische wereld, 1550-1800* (Serie: Nijmeegse Publicatis over de Nieuwe Geschiedenis núm. 2; Nimega 1991<sup>3</sup>) 173-198 (espec. p. 195-196); Salustiano de Dios, *Gracia, merced* 265-273, 288-292.
- <sup>(23)</sup> Registros de sentencias (ARB., Geh. R. Reg., núm. 670, f. 134ro-139vo, 144ro-vo; núm. 671, f. 13ro).
- <sup>(24)</sup> M. J. P. A. de Wilde, *Gratieverlening in Gelre ten tijde van de Republiek, 1581-1795* (Universiteit Nijmegen, tesina inédita; Nimega 1996) 18-19.
- <sup>(25)</sup> Dauwe y Monballyu, *J. de Damhouder* 132, 275; M.S. Dupont-Bouchat y X. Rousseaux, 'Le prix du sang: sang et justice du XVe au XVIIIe siècle', en: R. Muchembled (ed.), *Affaires de sang* (Serie: Mentalités. Histoire des cultures et des sociétés; París 1988 43-73 (véase p. 57-59).
- <sup>(26)</sup> Salvoconductos ('vrijgeleiden', 'saulfconduyctz') garantizan temporalmente e.o. a delincuentes refugiados protección jurídica para poder arreglar sus asuntos, eventualmente de gracia o de orden procesal o administrativo.
- <sup>(27)</sup> Lameere y Simont, *Recueil des ordonnances des Pays-Bas* t. IV, 326-327; t. V (Bruselas 1910) 54 y 332.
- <sup>(28)</sup> Ejemplos de dictámenes en cuanto a solicitudes de gracia de brujas se dan por R. Muchembled, *La sorcière au village, XVe-XVIIIe siècle* (París 1979) 187-188.
- <sup>(29)</sup> H. de Schepper, *De Kollaterale Raden in de Katholieke Nederlanden van 1576 tot 1609. Studie van leden, instellingen en algemene politiek* (Universiteit Leuven, tesis de doctorado inéd.; Lovaina 1972) 557-564, 760-761; P. P. J. L. van Peteghem, *De Raad van Vaanderen en staatsvorming onder Karel V, 1515-1555. Een publiekrechtelijk onderzoek naar centralisatiestreven in de XVII Provinciën* (Rechtshistorische reeks van het Gerard Noodt instituut, núm. 15; Nimega 1990) 71, 76, 78-79.
- <sup>(30)</sup> Rousseaux, 'Ordre moral' 74; P. Braun, 'La valeur documentaire des lettres de rémission', en: *La faute, la répression et le pardon. Actes du 107me congrès des sociétés savantes Brest 1982* (Section de philologie et d'histoire jusqu'à 1610; París 1984) I 206-221 (véase p. 209 y 215).
- <sup>(31)</sup> Lameere y Simont, *op.cit.* t. IV, 325; Foviaux, *La rémission des peines* 81, 325; H. de Schepper, 'Het gratierecht in het Bourgondisch-Habsburgse Nederland, 1384-1633. Vorstelijk prerogatief en machtsmiddel', en: H. Coppens y K. van Honacker (eds.), *Symposium over de Centrale Overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden. Tien bijdragen over de staat, de regering en de ambtenaren van de 16de tot 18de eeuw* (Standen en Landen, Serie espec. núm. 2; Bruselas 1995) 43-87 (véase p. 83).



- <sup>(32)</sup> R. Muchembled, *La violence au village, XVe-XVIIe siècle* (Turnhout 1989) 22; Cl. Gauvard, "De grace especial". *Crime, état et société à la fin du Moyen Age* (Université de Paris I. Histoire ancienne et médiévale, núm. 24; París 1991) t. II, 805-806. Véanse las consideraciones de las ordenanzas de 1541, 1544 y 1546 en: Laurent y Lameere, *op.cit.* t. II, 192-196 y 231-232; Lameere y. Simont, *op.cit.* t. IV, 325-329.
- <sup>(33)</sup> Hoppenbrouwers, *Een Middeleeuwse samenleving* t. I, 207.
- <sup>(34)</sup> Muchembled, *La violence* 17, 19, 23.
- <sup>(35)</sup> Muchembled, *l.c.*; Van Peteghem, *De Raad van Vlaanderen* 71, 194-195, 223; M. Vrolijk, *Doodslag en genade. Een onderzoek naar remissiebrieven van Amsterdammers van 1524 tot 1562* (Universiteit van Amsterdam, tesina inéd. 1994) 5, 44, 64. Véase también el inventario sobre las cuentas del audienciero en cuanto a la expedición de cartas de indulto, de perdón y de revocaciones de destierro en ciertas provincias, Dehaisnes, *Inventaire sommaire des Archives Départementales du Nord* t. III (Lille 1877) *passim*.
- <sup>(36)</sup> Sobre esto véase De Schepper y Vrolijk, 'La grâce princière et la composition' 752-754.
- <sup>(37)</sup> J. Decavele, *De dageraad van de Reformatie in Vlaanderen, 1520-1565* t. I (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, año 37 núm. 76; Bruselas 1975) 6-48, t. II, 58; A.F. Mellink, *Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw* (Nimega 1978) 32, 38, 109; J. D. Tracy, 'Heresy law and centralization under Mary of Hungary: conflict between the Council of Holland and the central government over the enforcement of Charles V's placards', *Archiv für Reformationgeschichte* 73 (1982) 284-308.
- <sup>(38)</sup> R. Fagel, *De Hispano-Vlaamse wereld. De contacten tussen Spanjaarden en Nederlanders, 1496-1555* (Serie: Nijmeegse Publicaties over de Nieuwe Geschiedenis núm. 4; Nimega 1996) 427.
- <sup>(39)</sup> J. Scheerder, 'De werking van de Inquisitie', en: *Opstand en Pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent* (Gante 1976) 153-165; A. Duke, *Reformation and Revolt in the Low Countries* (Londres/Ronceverte 1990) 154-164; oosens, *Les Inquisitions* t. I, 47-81; F. Postma, *Viglius van Aytta, President van de Geheime Raad en de Raad van State. De jaren met Granvelle, 1549-1564* (en prensa).
- <sup>(40)</sup> H. van Alphen (ed.), 'Documenten betreffende Jan van Sol en zijn voorstel tot vervolging der wederdopers', *Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis* nueva serie núm. XVI (1931) 205-236; H. ten Boom, *De reformatie in Rotterdam 1530-1585* (Hollandse Histoische Reeks núm. 7; Amsterdam 1987) 79-83, 89-93; Cl.M. Rooze-Stouthamer, *Hervorming in Zeeland, ca 1520-1572* (Goes 1996) 42-44, 165-198.
- <sup>(41)</sup> G. Marnef, "'Verleid en bedrogen". Berouwvolle doopsgezinden in Brabantse remissiebrieven, 1543-1565', *Doopsgezinde bijdragen* nueva serie XXII (1996) 69-77.
- <sup>(42)</sup> A. Goosens, 'Les grâces et rémissions de peine pour hérésie et transgression des ordonnances accordées par Charles-Quint et Philippe II dans les Pays-Bas méridionaux, 1521-1598', en: M. de Waele (ed.), *Clémence, oubliance et pardon en Europe, 1520-1650* (a revue du Département d'Histoire de l'Université de Montréal XVI/2; Montréal 1996) 8-20 (p. 10-13); id., *Les Inquisitions* t. I, 52, 57, 60-61, 63-67, 69-70, 84.
- <sup>(43)</sup> Decisión del Consejo Secreto, 20 aug. 1546 (ARB., *Geh.R. Reg.*, núm. 672, f. 11vo): 'in zijn lijwaet ende met eenen bernde keerse in zyn handt'.
- <sup>(44)</sup> Duke, *Reformation and Revolt* 162, 170.
- <sup>(45)</sup> Laurent y Lameere, *op.cit.* t. II, 39-40, 276-277, 467, 491-492; Lameere y Simont, *op.cit.* t.

IV, 325-329; t. V, 52-56 y 330-333; J. Lameere, *Recueil des ordonnances des Pays Bas* t. VI (Bruselas 1922) 37-38.

- <sup>(46)</sup> De Schepper, 'Modelo del proceso de decisión', en: Rietbergen y o., *Tussen twee culturen* 187-188.
- <sup>(47)</sup> L.Th. Maes, 'Die drei grossen europäischen Strafgesetzbücher des 16. Jahrhunderts', *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung* XLIV (1977) 207-217; M. van de Vrugt, *De criminele ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden* (Zütphen 1978) 100; M. Gijswijt-Hofstra, *Wijkplaatsen voor vervolgd. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18de eeuw* ([Dieren] 1984) 35.
- <sup>(48)</sup> 'Die gratie alleenlijcken komen moet vanden Persoon vanden Prince, deselve reserverende t'onswaerts, of tot onsen Stadthouder Generaal, of den genen die specialijcken daer toe geordineert ende gecommiteert zijn'.
- <sup>(49)</sup> 'Alsser eenige merckelijcke circonstantien zijn die 't delict ende misdaet verlichten ende verschoonen, sulcx dat wy na rechte beweecht mogen worden, om de peyne vander doot of die strangheyt vander Justitie of Wet te versoeten'.
- <sup>(50)</sup> *Groot Placaet-boeck* (in s'Gravenhage by Hillebrant van Wouw; 1664) t. II, f. 1018-1019 (art.24-25); Van de Vrugt, *De criminele ordonnantiën* 99-100; M.S. Dupont-Bouchat y X. Rousseaux, 'Le prix du sang' 53; Vrolijk, *Doodslag en genade* 71-72.
- <sup>(51)</sup> Sin embargo es curioso que en los años 1559-1566 se otorgan todavía algunas cartas de indulto para anabaptistas que se arrepentieron. Cf. Marnet, *op.cit.* 71.
- <sup>(52)</sup> H. de Schepper, 'Ketterwetten van 1561-1564', en: P. J. A. N. Rietbergen (ed.), *De periferie in het Centrum* (Nijmeegse Publicaties over de Nieuwe Geschiedenis núm. 1; Nimega 1986) 109-122 (espec. 113-118). Véase también M. van Gelderen, 'Conceptions of Librtty during the Dutch Revolt, 1555-1590', *Parliaments, Estates and Representations* IX (1989) 137-153 (espec. 137-140 y 144).
- <sup>(53)</sup> Postma, *Viglius van Aytta* (en prensa).
- <sup>(54)</sup> Geoffrey Parker, *The Dutch Revolt* (Londres 1977) 53-55; V. Vázquez de Prada, *Felipe II* (Barcelona 1990) 101-135; H. Kamen, *Felipe de España* (Madrid 1997) 81-96.
- <sup>(55)</sup> De Schepper, 'Ketterwetten van 1561-1564' 112-113.
- <sup>(56)</sup> Vázquez de Prada, *Felipe II* 15-16; Duke, *Reformation and Revolt* 171-172; Postma, *Viglius* (en prensa).
- <sup>(57)</sup> G. Janssens, 'Collaboratie en repressie in de Nederlanden vanaf de komst van Alva tot de Pacificatie van Gent, 1567-1576', en: *Handelingen van het XXXIe Vlaamse Filologencongres* (Bruselas 1977) 265-272 (véase 266-268); L. de Vos, *Het proces van Egmont* 3vols. (Zottegemse Culturele Kring XIXe, XXXe y XXXVIe Jaarboek; Sottegem 1972-1974, 1983 y 1987) t. I, 64-65; Goosens, 'Les grâces et rémissions de peine pour hérésie' 13, 15; id., *Les Inquisitions* t. I, 86-106, 115-116.
- <sup>(58)</sup> De Schepper, *Raden* 561-564.
- <sup>(59)</sup> Decavele, *De dageraad* t. II, 58; Ten Boom, *De reformatie te Rotterdam* 93-97; Muchembled, *La violence* 17, 19, 23; Vrolijk, *op.cit.* 6; Rooze-Stouthamer, *Hervorming in Zeeland* 174-183.
- <sup>(60)</sup> Scheerder, 'De werking van de Inquisitie' 163; P.A.M. Geurts, *De Nederlandse Opstand in de pamfletten, 1566-1584* (Utrecht 19832) 170 y 177.
- <sup>(61)</sup> Petición cit. de Sabina de Bavaria al rey, sin fecha [septiembre 1567]; carta cit. de Felipe II al duque de Alba, Madrid, el 12 de noviembre 1568.

- <sup>(62)</sup> Carta del Conde de Egmond a Felipe II, Bruselas, el 6 (sic) de junio 1568 (Archivo General de Simancas, *Estado-Flandes*, legajo 538, folleto 59-60).
- <sup>(63)</sup> De Vos, *Het proces van Egmont* t. III, 194.
- <sup>(64)</sup> Carta del duque de Alba a Felipe II, Bruselas, 9 de junio 1568 (*CODOIN*, t. XXXVII, 277); carta de Felipe II al duque de Alba, Madrid, el 10 de enero 1569 (*ibid.*, 524).
- <sup>(65)</sup> M. Avilés Fernández, 'Dimensiones ideológicas de la "Armada Invencible"', en: C. Ma. Cremades Griñán (ed.), *La Invencible* (Publicaciones de la Universidad de Córdoba Serie: Actas núm. 7; 1989) 11-26; Duke, *Reformation and Revolt* 169, 171-172.
- <sup>(66)</sup> Carta cit. de Felipe II al duque de Alba, Madrid, el 12 de noviembre 1568.
- <sup>(67)</sup> En realidad ya antes había querido hacer promulgar un perdón general, pero el duque de Alba rehusó de publicarlo.
- <sup>(68)</sup> De Schepper y Cauchies, 'Legal Tools' 259; Duke, *op.cit.* 152; Goosens, 'Les grâces et rémissions de peine pour hérésie' 13;.
- <sup>(69)</sup> La ordenanza de perdón general del 8 de marzo 1574 menciona 'sólo' a 144 personas que se excluyen del perdón.
- <sup>(70)</sup> Scheerder, 'De werking van de Inquisitie' 164; A.L.E. Verheyden, 'De Pacificatie van Gent, 1576. Een politiek-religieus maneuver of de aankondiging van een nieuwe tijdsgeest?', en: *Opstand en Pacificatie in de Lage Landen* (Gante 1976) 316-331 (véase p. 317-320); Janssens, 'Collaboratie en repressie' 268-271; Goosens, 'Les grâces et rémissions' 14-16; *id.*, *Les Inquisitions* t. I, 117-125.
- <sup>(71)</sup> Son las provincias de Flandes Valón o Galicant (Lille-Douai-Orchies), Artesia, Henao y Valencianas. Las otras provincias valonas, la de Namur y de Limbourg-sur-Vesdre, ya se había distanciado de la rebelión en los comienzos de 1577.
- <sup>(72)</sup> C.H.Th. Bussemaker, *De afscheiding der Waalsche gewesten van de Generale Unie* (2 vols.; Haarlem 1895-1896) *passim*.
- <sup>(73)</sup> Se estima esta minoría en Brabante y en Flandes Flamingant a unos 30 %; en Holanda y Zelanda todavía no contaban los protestantes con 5 %.
- <sup>(74)</sup> J. Briels, *Zuidnederlanders in de Republiek, 1572-1630. Een demografische en cultuurhistorische studie* (San Nicolas 1985) 26-99; J. Decavele, *Het eind van een rebelse droom* (Gante 1984) 127; M. Cloet, 'De gevolgen van de Scheiding der Nederlanden op religieus, cultureel en mentaal gebied, van circa 1600 tot 1650', en: J. Craeybeckx, F. Daelemans y F. Scheelings (eds.), "1585: Op gescheiden wegen ..." *Handelingen van het colloquium over de Scheiding der Nederlanden, gehouden op 22-23 november 1985 te Brussel* (Series: Colloquia Europalia, núm. VI; Lovaina 1988) 54-77 (espec. p. 54-65); A.M.J. de Kraker, 'De scheiding van de Vier Ambachten tijdens de Tachtigjarige Oorlog', en: *id.* y o. (eds.), "Over den Vier Ambachten". *750 jaar Keure – 500 jaar Graaf Jansdijk* (Kloosterzande 1993) 765-772 (véase p. 769). – Refiero igualmente al sinopsis de literatura por James D. Tracy, 'With and without the Counter-Reformation: the Catholic Church in the Spanish Netherlands and the Dutch Republic, 1580-1650', en: *The Catholic Historical Review* 71 (1985) 547-575.
- <sup>(75)</sup> A los 82.000 habitantes de Amberes se procuran cuatro años de tiempo; más de la mitad de ellos prefiere la huida y se establece en las 'provincias libres' de Holland y Zelanda. Véase J. Briels, 'De Zuidnederlandse immigratie, 1572-1630', *Tijdschrift voor Geschiedenis* C (1987) 331-355; *id.*, *Briels, Zuidnederlanders in de Republiek* *passim*.
- <sup>(76)</sup> Carta de Felipe II al gobernador general Farnesio, 30 de abril 1582 (Archivo General de Simancas, *Secretarías Provinciales. Negociación de Flandes*, legajo 2573, s.f.); Farnesio a

Felipe II, 24 de septiembre 1582 (ARB., *Audiëntie*, núm. 187, f. 109vo); Consejo Secreto a Farnesio, 26 de julio 1583 (*ibid.*, núm. 1782/4, s.f.).

<sup>17)</sup> Cartas de perdón y cartas de indulto, 1584-1609 (ARB., *Sp. Geh. R.*, núm. 894-921, *passim*); Dehaisnes, *Inventaire sommaire* t. III *passim*; De Schepper, Raden 564; id. y M. Vrolijk, 'La grâce princière et la composition' *l.c.*